

1 **Plantea recurso de casación.**

2

3 **Excma. CÁMARA en lo Civil y Comercial Común - Sala IIª.**

4

5 **Juicio: COCHA, José Edgardo s/prescripción adquisitiva. Expte. 470/09.**

6

7 **PEDRO SEBASTIÁN PUJOL**, abogado del Foro, por mis
8 propios derechos y como accionado en autos, a las Sras. Vocales de esta
9 Alzada respetuosamente digo:

10

11 **I.- Interpone recurso de casación.**

12

13 **- Procedibilidad formal o requisitos de admisión:**

14 **a) Tribunal receptor.**

15 Es este Tribunal ante quien se deduce este recurso
16 extraordinario local por imperativo legal, y a quien compete el primer examen
17 de admisibilidad, dando por cumplido así este recaudo formal.

18

19 **b) Notificación.**

20 La sentencia que se casa ha sido notificada mediante cédula al
21 domicilio legal el día 19 de mayo de 2.021, computándose el término
22 correspondiente desde el día siguiente hábil, razón por la cual la presente se
23 verifica antes del vencimiento del plazo recursivo y que además cuenta con la
24 posibilidad otorgada por el art. 132 del digesto civil y comercial común.

25

26 **c) Definitividad de la sentencia en recurso;**

1 La sentencia cuestionada en su estructura y contenido jurídico
2 mediante este recurso casatorio resulta asimilable a definitiva, toda vez que
3 fue dictada pretendiendo poner fin a una etapa probatoria fundadamente
4 cuestionada en su génesis, cuyas nulidades de trámite no pueden ser
5 remedadas a posteriori en la sentencia que dirima el proceso.

6 Además causa gravamen irreparable y afecta garantías
7 constitucionales como el debido proceso legal y la igualdad ante la ley, todo
8 lo cual autoriza a tener por satisfecho este recaudo formal. CSJN en *fallos* 248;
9 232; 272; 188; 301; 1197; 305, 903 y sus citas respectivas.

10 La sentencia recurrida adolece de una errónea aplicación de la
11 ley sustancial y adjetiva y contradice expresamente la doctrina legal fijada por
12 nuestro más alto Tribunal Provincial, causando por tanto también gravedad
13 institucional. *“Dijo esta Corte, en diferente integración, que la cuestión*
14 *propuesta excede el mero interés individual del recurrente para comprometer el*
15 *buen orden y la recta administración de justicia por cuanto si una misma*
16 *cuestión puede ser resuelta de manera opuesta según sea el Tribunal que en*
17 *razón del turno deba entender en el litigio, grave descreimiento y desazón*
18 *traerán a quienes obtengan soluciones contradictorias (“Banca Nazionale del*
19 *Lavoro S.A. En igual sentido Sent. n° 503 “Arrieta Háctor René Vs. Grafa S.A.*
20 *s/Indemnización. Sentencia n°: 376 Fecha: 22/05/2001. Romano Carlos Vicente*
21 *Vs. Grafa S.A. – Indemnizaciones.*

22 Dicho gravamen se presenta como un absurdo fruto de la
23 entelequia judicial que desatiende la realidad de que sus pronunciamientos
24 tienen consecuencias directamente palpables en la paz social, y afecta de
25 manera grave los derechos constitucionales de las partes, siendo este
26 recurrente el afectado en el caso concreto.

1 Afecta por ello sin lugar a dudas, la estructura procesal, el
2 debido proceso, la igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.) y demás garantías
3 constitucionales que *ut-infra* se analizan, al impedir la revisión de un
4 pronunciamiento que fue causado por una sucesión cronológica de
5 descomunales errores en la aplicación de la norma adjetiva atribuibles al
6 Juzgado –a los cuales la sentencia casada renuncia revisar, y si bien los
7 reconoce sin rodeos, hasta indulgentemente los dispensa– que afectan los
8 derechos de defensa en juicio y debido proceso de las partes, pero excediendo
9 claramente el mero interés particular, y afectando de ese modo a la
10 comunidad toda por la gravedad del pronunciamiento casado.

11

12 **d) Depósito. (art. 752 del C.P.C.C.)**

13 Más allá de que consideramos no corresponde en la especie
14 por tramitar mi parte con el beneficio para litigar sin gastos conf. al art. 260
15 CPCC, el depósito exigido legalmente está acreditado *ad eventum* a la orden
16 del Címero Tribunal local, y por tanto se acompaña respectivo comprobante.

17

18 **e) Infracciones al derecho. (art. 750 del C.P.C.C.)**

19 La sentencia en crisis, además de infringir claras normas de
20 derecho formal conf. a lo previsto por el art. 750 del CPCC, adolece de vicios
21 de arbitrariedad y gravedad institucional, todos los cuales habilitan de por sí
22 esta instancia extraordinaria conforme serán desarrollados *in extenso* más
23 adelante. La sentencia recurrida incurre en omisión, infracción y errónea
24 aplicación de las siguientes normas de derecho sustancial y formal; art. 14, 16,
25 17, 18 y 31 de nuestra Carta Magna, arts. 122 y 293 del CPCC, 34, 131, 272, 385 y
26 cctes. del Digesto Procesal Civil local.

1 **f) Antecedentes.**

2 La sentencia casada incurre en infracciones a normas de
3 derecho, tanto a las sustanciales como especialmente a las formales, siendo
4 por ello materia específica de recurso de casación conf. al art. 75º CPCC.

5 En resumen, puedo afirmar que el pronunciamiento consagra
6 una abierta derogación al sistema procesal civil de la Provincia –al menos en
7 materia probatoria y de las notificaciones previstas en forma personal– y crea
8 un nuevo código procesal civil para el fuero del sur tucumano, que de
9 confirmarse, crearía una suerte de peligroso desuetudo forense a las normas
10 que reglan las notificaciones personales que resguardan el derecho de defensa
11 en juicio, y el ofrecimiento y producción de la prueba en los procesos civiles.

12 Así es como de consagrarse este disvalioso criterio que
13 pretende plasmar la sentencia en crisis, de ahora en más las pruebas en los
14 procesos civiles podrían producirse según la más amplia discrecionalidad del
15 Magistrado director de cada proceso, sin atenerse a regla procesal alguna, ni
16 resguardando el derecho de defensa de las partes.

17 La nulidad de la sentencia surge de la incongruencia de
18 considerar dispensable la producción de prueba en un proceso fuera del plazo
19 procesal –expresamente previsto bajo pena de nulidad– por lo que la
20 infracción a la norma de derecho que habilita la vía casatoria es clara en la
21 especie.

22 *“La Casación es un instituto judicial consistente en un órgano*
23 *único en el Estado (Corte de casación) que, a fin de mantener la exactitud y la*
24 *uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los tribunales al*
25 *derecho objetivo, examina, solo en cuanto a la decisión de las cuestiones de*
26 *derecho, las sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son*

1 *impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial (recurso de*
2 *casación) utilizable solamente contra las sentencias que contengan un error de*
3 *derecho en la resolución de mérito”* Cfr. Calamandrei, Piero: Casación Civil,
4 traduc. de Santiago Sentís Melendo, I, pág. 376. E.J.E.A., Bs. As., 1959.

5 Conforme a la cita del respetado maestro florentino, el
6 decisorio del pronunciamiento en crisis resulta ser específica materia de
7 competencia casatoria de esta Suprema Corte Provincial, la cual debe
8 uniformar la jurisprudencia provincial frente al injustificable avallasamiento
9 que esta parte ha sufrido, y que de confirmarse extendería sus consecuencias
10 afectando a la seguridad jurídica de la comunidad toda, con claros caracteres
11 consecuentes de gravedad institucional, derogando en la especie normas de
12 orden público derivadas de garantías constitucionales y convencionales del
13 digesto procesal civil local.

14 No se trata de apreciación de cuestiones probatorias ni de
15 normas que puedan tener dudosa interpretación. Reconoce expresamente el
16 fallo casado que la prueba objetada por nula en numerosos cuadernos se
17 produjo fuera del plazo legal, sin fundamentar coherentemente de que
18 manera elude el terminante recaudo del art. 310 del digesto procesal civil, el
19 que declara inaplicable en la especie.

20 Debo citar el artículo procesal íntegro por ser imprescindible a
21 fin de resaltar la obviedad de la nulidad del pronunciamiento. El art.310 del
22 CPCC dice: ***“La prueba deberá ser producida dentro del plazo probatorio,***
23 ***bajo pena de nulidad, pero, si por razones no imputables al presentante, no le***
24 ***hubiera sido posible producirla, el juez mandará recibirla antes de alegarse de***
25 ***bien probado. El rechazo de la petición no dará lugar al recurso de apelación,***
26 ***pero la parte interesada podrá replantear la cuestión en la alzada.”*** (resalté en

1 negrita lo relevante y crítico de la norma en la especie.)

2 Y para fundamentar esta pirueta argumental increíblemente el
3 fallo en crisis afirma en forma contradictoria: “...no se advierten razones para
4 dejar sin efecto lo actuado en relación a las pruebas producidas en autos -y sin
5 desconocer el principio de que las mismas deben ser producidas dentro del
6 período probatorio-, cuando el mismo art. 310 que cita el recurrente autoriza al
7 juez, cuando mediaren razones no imputables al presentante, o no hubiera sido
8 posible producirla, a recibirlas antes de alegarse de bien probado, situación que
9 se advierte en la especie.”

10 Lo que el pronunciamiento casado oculta y pasa notoriamente
11 por alto, es que ni el Juez ni las partes dispusieron o petitionaron la
12 producción más allá del plazo legal y dentro del término probatorio a fin de
13 hacer operativo el supuesto de la norma. No explicita ni demuestra –ni
14 tampoco podría hacerlo– de que manera hubieran mediado razones no
15 imputables al presentante en la especie. Lo cierto es que cuando el plazo de
16 producción probatoria feneció, ni siquiera el mismo Juez del proceso puede
17 volver y retrotraer etapas fenecidas contra el principio de preclusión procesal.

18 Dicha consideración –reiterada de distinta manera en los fallos
19 de ambas instancias– es absolutamente nula, estéril para ser el basamento de
20 una construcción sentencial motivada conf. a los arts. 30 de la Constitución
21 Provincial, y 34 y 264 del digesto procesal, ya que permitiría la ‘reencarnación’
22 y transformación o recambio de actos ya fenecidos y perentorios por el
23 pretense usucapiente –lo que es no es ponderado en ambas sentencias
24 aunque como también se verá, previa y expresamente había quedado
25 pendiente de resolución en el trámite con llamado de autos en cada
26 cuaderno– todo lo cual la ley procesal sanciona bajo pena de nulidad.

1 Dicha nulidad surge de las propias sentencias, casándose por
2 una cuestión técnica en forma directa la última de ellas, y al haber sido ambas
3 recurridas sin consentir a ninguna, como al poner en evidencia su carácter
4 patente e insubsanable, así debe ser declarado en esta instancia
5 extraordinaria.

6 ¿Los plazos procesales son improrrogables y perentorios, tal
7 como lo dispone el art. 122 del CPCC, o resulta ser una norma que no es de
8 orden público? ¿Existe la preclusión procesal en el digesto procesal civil local?

9 Porque en los fallos de ambas instancias inferiores se ha
10 obviado estas decisivas cuestiones, claro que entendemos que ello sucedió en
11 un principio en forma involuntaria y principalmente por recarga de tareas en
12 el Juzgado de trámite, verificándose también los actos nulos e insusceptibles
13 de convalidación y producidos a instancias de las insustanciales y reiteradas
14 peticiones de la actora, que han causado todo este dislate desde el inicio del
15 período probatorio en autos.

16 Es por ello que lejos de considerar dispensable su conducta y
17 suplir su negligencia, el fallo debería considerar su renuncia en el caso
18 concreto a la posibilidad de petitionar la ampliación del plazo legal, por lo
19 que desde el inicio de la etapa probatoria en el trámite de autos se produjo
20 una flagrante violación de la normativa adjetiva imperativa en la materia,
21 llevando a considerar en las sentencias actos nulos, de nulidad absoluta e
22 inconfirmable, como las pretensas pruebas producidas cuando el proceso
23 estaba pendiente de resolución y con llamados de autos firme para las partes
24 en cada cuaderno.

25 Repárese en que si bien el fallo casado pretende suplir la
26 negligencia de la parte, el mismo proveído de fecha 19.12.2013 que abre a

1 prueba la causa bien dice que lo hace por 20 días, debiendo ofrecerse dentro
2 de los 5 primeros días, conf. al trámite sumario impreso a la causa previsto en
3 el art. 392, inc. 2, a) del CPCC. Y dicho proveído no es más que lo preceptuado
4 por el Art. 397.- *El plazo de prueba no será mayor de veinte (20) días. La prueba*
5 *se ofrecerá dentro de los primeros cinco (5) días y se producirá en los restantes,*
6 *bajo pena de nulidad.*

7 El fallo nada dice respecto a que las contrarias pudieron
8 sortear tal valladar temporal de haber peticionado su producción conforme al
9 art. 310 CPCC citado, pero lo cierto es que no lo hicieron. Esta parte si lo hizo
10 en sus probanzas, y al no haberlo hecho así, toda actuación, oficio o
11 audiencia, etc. en los cuadernos probatorios de las contrarias practicadas en
12 fecha posterior al día 26 de agosto de 2013 resulta insubsanablemente nula, y
13 así debió ser declarado en cada uno de los cuadernos con pruebas pendientes
14 de resolución, circunstancia que el fallo de Alzada pretende
15 incomprensiblemente omitir.

16 El perjuicio que se causa a esta parte es evidente, y es permitir
17 litigar a otras partes que no hayan peticionado la aplicación del art. 310
18 procesal en irritante desigualdad de condiciones, vulnerando el principio de
19 seguridad procesal al permitírsele la producción de pruebas cinco años
20 después de su ofrecimiento y en mi ausencia.

21 Las normas adjetivas citadas fulminan con la sanción de
22 nulidad a las pruebas producidas fuera del plazo probatorio fijado, y no puede
23 haber excepción a quienes no hayan justificado dentro del mismo plazo
24 peticionar fundadamente su ampliación, como si lo hizo por ejemplo esta
25 parte el día 21.08.2013 en cada uno de sus cuadernos.

26 Que el fallo casado pertenda permitir convalidar entonces

1 prueba producida por el plazo de 40 días del proceso ordinario y *sine die*, a las
2 partes en un juicio sumario en el que ha sido negligentes en su producción
3 resulta nulo e inmotivado, carente de toda justificación lógica. Las pruebas
4 producidas fuera del plazo –como bien lo dicen los arts. 310 y 397– son nulas y
5 afectan por tanto el derecho de defensa, de igualdad ante la ley y debido
6 proceso de esta parte.

7 El fallo casado es inmotivado en cuanto toma como válidas
8 posturas procesales tomadas en abierta infracción a las normas de los arts.
9 122, 310 y cctes. del digesto procesal local, por quienes carecían de derecho a
10 seguir produciendo pruebas al no haber ejercido –o más bien omitido
11 hacerlo– la posibilidad de petitionar al Juzgado la ampliación del plazo
12 probatorio, pretendiendo justificar –inmotivadamente claro está– las
13 supuestas razones que le impidieron producir la prueba.

14 Todo ello descalifica al fallo casado como un acto
15 jurisdiccional válido, el que se recurre ante el Superior Tribunal de la
16 Provincia para que, en ejercicio de la facultad conferida por los arts. 748 y
17 cctes. del digesto procesal local, case el mismo en todas sus partes por abierta
18 infracción a las normas sustanciales y especialmente a las adjetivas.

19 El extenso pero desentendido análisis sentencial efectuado en
20 autos en la sentencia de primera instancia tampoco es debidamente
21 examinado en la Alzada, la que en su pronunciamiento renuncia a su tarea
22 revisora convalidando la actividad viciada previa al mismo por la detallada
23 descripción que hace de los hechos que surgirían a su entender de las
24 probanzas, pasando por alto en tal análisis descriptivo todas las nulidades
25 insubsanables llevadas adelante en la misma instancia inferior de trámite, lo
26 cual la convierte en una sentencia que deja de ser revisora para tornarse nula

1 e inmotivada.

2 Es por ello que la sentencia no es una adecuada respuesta
3 jurisdiccional a la apelación planteada, ya que se limita a convalidar la
4 incongruente sentencia de primera instancia, invocando a más de ello
5 razones de equidad o afianzar la justicia, que nada tienen que ver en el caso
6 traído a vtro. conocimiento, dado que se pretende convalidar en la instancia
7 de Alzada actuaciones procesales llevadas adelante por la vía de los hechos en
8 desmedro de mi derecho de defensa el trámite del proceso y por tanto nulas,
9 y so pretexto de salvaguardar las actuaciones inválidamente cumplidas
10 invocando razones de seguridad procesal con razonamientos parcializados
11 que más allá de no compartirse, poco o nada tiene que ver con lo resuelto.

12 Nuestro asombro es mucho mayor aún al encontrar otra
13 sentencia dictada hace seis meses por el mismo Tribunal cuyo fallo se casa
14 que dice exactamente lo contrario respecto a la aplicación extemporánea del
15 art. 310 del CPCC:

16 *“Entiendo que el art. 723 inc. 2 del CPCyCT no es de aplicación en el presente*
17 *caso, porque la prueba pericial no se produjo en razón que la solicitud de la ampliación del plazo*
18 *probatorio del art. 310 CPCyCT se realizó cuando dicho plazo ya estaba vencido (en dicho*
19 *cuaderno), sin que existiera ninguna causa que obstara a que el hoy apelante pudiera haber*
20 *efectuado ese pedido (de ampliación del plazo probatorio) antes del vencimiento del mismo. Por*
21 *lo que entiendo que este Tribunal está impedido de disponer de una actividad probatoria -como el*
22 *sorteo de nuevo perito- cuando este no pudo realizarse porque el plazo probatorio en primera*
23 *instancia ya se encontraba vencido y el co-demandado no fue diligente en el pedido oportuno de*
24 *su ampliación”.* Dres.: Leal - Posse - Ibañez de Córdoba. Cámara Civil y Comercial Común -
25 Concepción - Sala Única. *Rojano, Adrián Jesús Vs. García Rodolfo Alfredo s/ Daños y Perjuicios.*
26 *Expte: 565/11. Sent. nº: 197 de fecha 11/11/2020.*

1 Aquel criterio sin dudas es el que se apega a la interpretación
2 de la norma procesal aplicable y a la respectiva jurisprudencia de este Foro.
3 Pero me pregunto: ¿Porqué sin haber transcurrido siquiera un año el mismo
4 Tribunal dice exactamente lo contrario, pretendiendo convalidar actos nulos
5 que dejarían a mi parte en un estado de absoluta indefensión?

6 Más allá de todas las declaraciones de buenas intenciones de la
7 sentencia casada, resulta evidente por ello que en realidad la seguridad
8 procesal vulnerada es la de esta parte, por lo que la sentencia en crisis de
9 Alzada pretende dar por ende el sentido contrario a las patentes constancias
10 de autos –tratándose la cuestión nodal de un fárrago de fojas llevadas
11 adelante por la fuerza y en forma nula– como a la interpretación de la expresa
12 normativa aplicable a las mismas –la que deroga en la especie– ya que es
13 evidente que no puede dogmáticamente cambiar el sentido a las normas ni la
14 interpretación a la realidad.

15 Lo cierto es que de aceptarse el criterio de la sentencia casada,
16 se estaría abriendo una caja de Pandora al convalidar retroactivamente la
17 producción de la prueba *sine die* (en todos los cuadernos de la actora y
18 algunos de la codemandada) y sin que la misma parte actora (o el Juez,
19 supliendo inequitativamente su negligencia), invocaran tempestivamente
20 impedimento alguno para la producción probatoria y justificaran así la
21 ampliación del plazo antes de que el mismo fenezca.

22 Es precisamente donde ahí radica la nulidad insubsanable y la
23 gravedad institucional que excede el mero interés individual de las partes,
24 pretendiendo la sentencia casada soslayar gravemente el derecho
25 constitucional de defensa de esta parte, vulnerando el debido proceso.

1 Y nos permitimos preguntar a los Sres. Vocales del Címero
2 Tribunal local, para el hipotético y extremo caso de considerar que el criterio
3 sentencial es atendible: ¿Se aplicará este criterio a todos los procesos a
4 futuro? ¿Los plazos dejarán de ser perentorios para quedar librados al mero
5 arbitrio discrecional de cada Juez o Cámara, aún fenecidos? ¿Cada Juzgado
6 tendrá de acá en más un propio código procesal propio, a la cual las partes y
7 los litigantes deberán ajustarse según la suerte que el sorteo de Mesa de
8 Entradas les depare?

9 Como también debemos preguntar a los Sres. Vocales, para el
10 hipotético, poco posible y extremo caso de considerar que las probanzas
11 producidas más de cinco (5) años después de vencido el plazo de prueba son
12 válidas: ¿Se sentará nueva doctrina legal diciendo que la dispositiva del art.
13 310 del digesto procesal que le pone un coto al plazo de cada tipo de proceso,
14 tiene carácter relativo y escapa al principio de preclusión y perentoriedad del
15 art. 122 del mismo cuerpo legal? ¿Pueden los Magistrados volver discrecional
16 y retroactivamente contra plazos fenecidos en el proceso, no solo para las
17 partes sino incluso para ellos mismos?

18 Bien se estableció que “...un plazo es perentorio cuando por el
19 solo transcurso del tiempo se produce la caducidad del derecho que ha dejado
20 de usarse, sin que para ello sea necesaria una petición de parte. Una vez
21 vencido el plazo no es susceptible de que por acuerdo de los litigantes se lo deje
22 sin efecto o se lo modifique. No obstante, el CPN admite que se lo prorrogue por
23 acuerdo de partes, siempre que éste opere antes de su vencimiento... La regla
24 por la cual el juez puede considerar la actividad de las partes realizada según el
25 orden legal, opera en el derecho argentino con total rigidez... A este principio
26 prestan respaldo las garantías constitucionales de seguridad jurídica y de

1 *defensa en juicio*". Fenochietto, Carlos E., Cód. Proc. Civil y Comercial de la
2 Nación comentado. T. 1, págs. 554/5. Ed. Astrea, Bs. As., 2001.

3 A los Sres. Vocales quizás les parezcan una obviedad las citas
4 de doctrina comentadas del art. 155 del CPCCN –similar a nuestro art. 122
5 CPCC– pero no lo es frente a la inusitados considerandos de la sentencia en
6 crisis, que por medio de exhortaciones a “*afianzar la justicia*” y demás elipses
7 inclina la balanza judicial en detrimento de la igualdad y a favor de la parte
8 negligente, que en concreto dejó de petitionar la ampliación del término
9 probatorio –lo que nadie le impidió en los hechos, ni tampoco es demostrado
10 por la contraria o el fallo casado tal impedimento– en menoscabo de esta
11 parte que sí cumplió todos los actos del proceso tempestivamente.

12 Si bien se me atribuye haber petitionado la ampliación del
13 plazo de uno de los cuadernos tardíamente, lo cierto es que el escrito al que
14 alude la sentencia de Alzada resulta reiteración de otro previo, y en el trámite
15 de todos mis cuadernos fue petitionada la ampliación dentro del plazo del
16 art. 310 procesal. Ello que por lo demás es una afirmación que intenta
17 justificar la violación de mi derecho de defensa por un argumento que
18 pretende mostrarse como salomónico e insubsistente, dado que el trámite de
19 ninguna de las probanzas producidas por mi parte fue cuestionado por las
20 contrapartes.

21 El fallo en un *lapsus* inaceptable demuestra querer justificar
22 inaplicar abiertamente una norma de orden público, cuando lo que debería
23 haber hecho por coherencia lógica es decir, en todo caso, que toda prueba
24 producida fuera del plazo probatorio era nula –sea de la parte– que fuera y no
25 tentar justificar la nulidad de las que pretende hacer entrar por la ventana del

1 proceso. Un argumento disfrazado de consuelo no puede sustentar
2 válidamente una sentencia de Alzada.

3 Pero como lo dijimos y a todo evento, ninguna de mis pruebas
4 fue cuestionada en sus formas o su contenido –por haber sido ofrecidas y
5 producidas en forma tempestiva– sino tan solo las de las contrarias, y el fallo
6 renuncia conscientemente a su tarea revisora para tentar justificar lo
7 inaceptable.

8 El pretenso fundamento sentencial contradice normativa
9 procesal específica y el principio de congruencia. Se configura así una
10 negativa formal y *contra legem* de la sentencia casada al tratamiento de los
11 agravios planteados por esta parte por tratar de dar más fundamento aún o
12 sostener el escaso andamiaje argumentativo del pronunciamiento de primera
13 instancia, por medio de declaraciones dogmáticas y arbitrarias que surgen del
14 mero parecer de las sentenciantes, pero que por otro lado contradicen
15 flagrantemente –en violación del debido proceso, del derecho de defensa en
16 juicio y del principio de igualdad– la normativa específica aplicable que nos
17 obliga a ocurrir al conocimiento de este Címero Tribunal, para que por medio
18 de resolución fundada, se acoja el planteo recursivo de esta parte.

19 Nunca la mera voluntad sentencial puede alterar el contenido
20 y alcance de una norma, por la mera decisión dogmática plasmada en una
21 sentencia de primera o de segunda instancia.

22 Así las cosas, la Alzada dicta un pronunciamiento gravemente
23 desvinculado de las constancias de la causa y mostrando como único
24 fundamento –al igual que el fallo del Juzgado de trámite– la propia voluntad
25 sentencial. Carece la sentencia casada de un análisis crítico y fundamentado
26 en las constancias de autos, para convertirse en mera alquimia de fórmulas de

1 falaz equidad o pretensas sabuesas de la inalcanzable ‘verdad objetiva’, pero
2 que en el caso concreto pretenden desconocer que el plazo probatorio tiene
3 un *dies a quo* y un *dies ad quem*, el que en el caso concreto declara inaplicable
4 con inatendibles argumentos a las propias constancias de autos.

5 Esta es la cuestión medular sobre la que debió expedirse la
6 sentencia de Alzada pero solo la refiere tangencialmente, sin tratarla en la
7 forma necesaria para ser considerada un acto jurisdiccional válido.
8 Consecuencia de su deliberada omisión es también el previsible resultado al
9 que arriba la sentencia, pretendiendo confirmar a una pretensión *contra*
10 *legem*, y condenando a esta parte a no poder ejercitar su derecho de defensa,
11 vulnerando el debido proceso en juicio de mi parte que es lacerado hasta
12 límites impensados.

13 Todo ello trasluce en definitiva consecuencias gravosas, ya que
14 da por perdida en definitiva mi legítimo derecho convencional a obtener una
15 sentencia tramitada en igualdad de condiciones para las partes, lo que legal y
16 lógicamente me corresponde en la especie.

17 Igualdad que no justifica de manera alguna su vulneración
18 dado que las partes deberían encontrarse en pie de igualdad objetiva en el
19 proceso, lo que ni la sentencia del Juzgado de trámite ni la de Alzada –contra
20 la que en definitiva se interpone este recurso– reconocen en la especie.

21 No se trata por lo demás de una acción consumeril, sistema
22 legal atravesado tangencialmente por normas que obligan siempre a la
23 interpretación más favorable al consumidor, ni tampoco de un proceso
24 laboral o penal en el que una de las partes pueda prevalerse de los principios
25 *in dubio pro operario* o *in dubio pro reo*.

1 Se trata de la pretensión de hacerse de mala fe con fracción de
2 una propiedad de mayor extensión, sobre la cual los Magistrados de este
3 Poder deberían tener una mirada restrictiva a favor del *dóminus* que pretende
4 ser despojado de su propiedad, que como legítimo comprador de buena fe de
5 hace más de 22 años ahora me veo envuelto en este laberinto judicial
6 incomprensible. Pero irreflexivamente la sentencia casada hace justamente lo
7 contrario: premia a la parte que reconoce actuar *in limine* de mala fe, y
8 pretende suplir su negligencia en forma injustificable e inmotivada.

9 Siendo, conforme a reiterados pronunciamientos de Alzada y
10 de este mismo Alto Tribunal la vía casatoria el carril adecuado para su
11 planteo, de esta forma también dejamos planteada también la nulidad de
12 sentencia casada, peticionando se trate también esta pretensión
13 nulidificatoria al resolver el recurso extraordinario local interpuesto.

14

15 **II.- De la violación, inobservancia o errónea aplicación**
16 **del derecho adjetivo.**

17 Por medio de este recurso se demostrará que la pretendida
18 solución dada por el Tribunal sentenciante es contraria a derecho, y
19 continuaremos con la demostración de la violación a las normas adjetivas que
20 también habilitan casar el fallo, conf. al art. 750 del digesto procesal civil.

21 El recurso de casación es interpuesto por violación,
22 inobservancia y errónea aplicación del derecho adjetivo de orden público en
23 la especie. Asimismo, nuestro máximo Tribunal provincial ha reconocido
24 desde antiguo la arbitrariedad y la gravedad institucional como específica
25 materia casatoria, las que también se verifican en autos.

1 Pues bien, en la sentencia en crisis ha incurrido en todos los
2 vicios mencionados, al haber obviado arbitrariamente circunstancias
3 fundamentales que hacen a la resolución que debió dictarse en consecuencia.

4 También diremos que parte del asunto nodal de la cuestión
5 gira alrededor de la aplicación e interpretación que efectúa el Tribunal del
6 alcance de las normas procesales y de fondo, ya que no consideró que la
7 sentencia de primera instancia reconoce expresamente al sentenciar mi
8 planteo de nulidad del *'llamado a alegar'* que no había dictado
9 pronunciamiento en todos los planteos de nulidad interpuestos en el trámite
10 de autos, lo que coetáneamente hizo en el mismo acto de resolver la última
11 nulidad planteada el Juez de trámite, antes de rechazar el pase de autos a
12 alegar.

13 Ello resulta prueba concluyente del reconocimiento por parte
14 de ambas instancias de la existencia de las nulidades previas verificadas en el
15 trámite impreso a estos autos.

16 Luce por su ausencia la ponderación de este agravio específico
17 en la sentencia de Alzada, puesta en crisis por medio de este recurso. El
18 desconocimiento de esta circunstancia fundamental por el fallo casado
19 demuestra el indebido análisis y valoración del mismo y también su falta de
20 motivación al sentenciar, ya que dejó de ser un elemento claramente
21 controvertido que hasta la misma Alzada reconoce, renunciando efectuar una
22 devolución jurisdiccional concreta y motivada sobre esta cuestión.

23 La sentencia casada también pretende incomprensiblemente
24 soslayar una violación flagrante al derecho de defensa de esta parte, de la que
25 me agravié expresamente al presentar memorial contra la sentencia de
26 primera instancia, que sin embargo se pretende justificar.

1 Y demostrándolo cito: *“Por su parte, se observa que luego de*
2 *interpuesta la nulidad, se realizaron actuaciones en los respectivos cuadernos*
3 *de prueba de las que fueron notificadas las partes, sin que el recurrente hubiera*
4 *objetado la producción de las pruebas realizadas, en ese interregno, ni impugnó*
5 *la agregación de los oficios diligenciados ni los proveídos que fijaron las fechas*
6 *para realizar las audiencias de testigos o la inspección ocular practicada, ni*
7 *impugnó las providencias que dispusieron la ampliación de los plazos en los*
8 *diferentes cuadernos, con lo que su actuar contribuyó a la producción de las*
9 *mismas, sin que pueda, sin ir en contra de los propios actos, plantear luego la*
10 *nulidad de actos que ha consentido. Avala lo dicho el hecho de que las*
11 *notificaciones en el periodo de probatorio se efectúan de manera diaria y a la*
12 *oficina, por lo que el Dr. Pujol no podía desconocer las actuaciones*
13 *mencionadas.”*

14 Y refutando lo afirmado por el pronunciamiento casado, si
15 puedo decir que todos esos trámites fueron realizados en mi
16 desconocimiento, dado que han sido llevados adelante veladamente, sin que
17 sea óbice para ello que se hayan notificado *ministerio legis*, dado que las ocho
18 (8) cédulas en mi poder –y que deberían obrar en el expediente también
19 firmadas por el Secretario Uribio en cada uno de los cuadernos de prueba
20 impugnados– tienen idéntico decreto: *“Concepción, 3 de octubre de 2013. Por*
21 *deducido incidente de nulidad. Córrase traslado a la contraria por el término de*
22 *cinco días. SUSPÉNDANSE los plazos en el presente cuaderno de pruebas hasta*
23 *tanto se resuelva la cuestión planteada. PERSONAL. Fdo. DRA. IVANA*
24 *JAQUELINE MOCKUS. Juez.”*

25 Los ocho decretos –y sus cédulas de notificación respectivas–
26 obran en los cuadernos del actor 1 a 5 (A1 hasta A5), y demandado 1 a 3 (D1 a

1 D3), y son los últimos actos válidos en autos en los mismos. Fueron
2 dispuestos en su única intervención y con acertadísimo criterio por la Sra.
3 Juez subrogante referida, y fueron notificados a las partes en forma personal
4 en aquel momento en los casilleros físicos del Poder Judicial.

5 De tales cuadernos mencionados, ahora incorrectamente
6 agregados a estos autos –por lo cual también mi derecho de defensa se ve
7 menguado al no poder ser consultados por el sistema SAE– surge que los
8 términos se suspendían hasta que recayera sentencia firme en los planteos de
9 nulidad, lo que nunca aconteció. Y si bien en la sentencia apelada del
10 11.10.2019 pretende el Sr. Juez de trámite resolver tardíamente y en indebida
11 forma los mismos, lo cierto es que lo hace en forma nula, ante otro planteo
12 poniendo en evidencia la nulidad del llamado de autos para alegar.

13 Todo acto cumplido a posteriori de tales notificaciones en esos
14 cuadernos (A1 a A5 y D1 a D3) es nulo de nulidad absoluta e insubsanable, al
15 resultar necesario para su validez la previa reapertura de los plazos, notificada
16 en forma personal conf. al art. 153 del CPCC: *“Serán objeto de notificación*
17 *personal, directamente en el expediente o en el domicilio:*

18 4. *Las providencias que se dicten entre el llamamiento de autos*
19 *para sentencia y ésta última.*

20 6. *Las providencias que ordenaran intimaciones,*
21 *emplazamientos o la suspensión o reanudación del curso de términos*
22 *procesales...”.*

23 Posteriormente a ello se corrió traslado de los incidentes de
24 nulidad planteados por mi parte, siendo contestados por las contrarias y
25 llamándose los autos a resolver por el Juez de trámite.

1 Es decir, el pretenso argumento sentencial de primera
2 instancia –que pretende ser confirmado por el fallo casado– viola
3 flagrantemente dos de los incisos del art. 153 CPCC que ordenan la
4 notificación personal de la reanudación de los plazos, y de cualquier acto que
5 medie entre el llamado de autos para sentencia y esta última.

6 Como es lógico, no puede endilgarse a esta parte la falta de
7 atención a las supuestas notificaciones *ministerio legis* que se imputan
8 realizadas –lo que no puedo siquiera corroborar en los viejos comparendos,
9 menos aún en este nuevo período de imposibilidad de acudir a los Juzgados o
10 Cámaras a compulsar las causas, conf. a las acordadas 608 y 656 del 2021–
11 pero lo cierto es que mi parte, frente a una expresa suspensión de plazo y un
12 llamado de autos para sentencia, no tenía obligación alguna de atender a
13 notificaciones diarias, sino más bien a esperar el dictado de las interlocutorias
14 respectivas en larga mora jurisdiccional, o bien una notificación de la
15 reanudación de los plazos por alguna otra circunstancia sobreviniente en
16 cada cuaderno. No aconteció ni lo uno ni lo otro.

17 La ligereza del argumento del fallo, el desconocimiento
18 consciente de normas expresas de orden público –derivadas directamente del
19 derecho de defensa en juicio del art. 18 de la Constitución Nacional– y el
20 desentendimiento de la cuestión traída a estudio nos convence de la
21 procedencia de esta vía excepcional, por las divaliosas y gravosas
22 consecuencias de la resolución casada, y por haber gravedad institucional
23 manifiesta, que excede el mero interés de las partes, afectando resoluciones
24 como la impugnada a la comunidad toda.

25 Se ha pretendido así tramitar cuadernos de pruebas en mi
26 ausencia y en la más absoluta indefensión para esta parte, cuando los mismos

1 estaban pendientes de resolución de la nulidad que cuestionaba la posibilidad
2 de su producción. Nada menos. Pero la sentencia casada tiente convalidar
3 esta actividad nula, de nulidad absoluta e inconfirmable.

4 ¿Cuál es la tarea de un Tribunal de Alzada? Entendemos que le
5 corresponde “juzgar” el caso traído a examen de acuerdo a las constancias de
6 autos, las pruebas aportadas y su correspondencia a las normas –en especial
7 formales en el caso sub examine– en las cuales se basa y desenvuelve la
8 materia específica de su competencia.

9 Nos preguntamos como una sentencia puede vulnerar no solo
10 las normas adjetivas y sustanciales señaladas, sino y por sobre todo el derecho
11 de defensa en juicio, y el principio de debido proceso estatuidos en la Carta
12 Magna nacional.

13 *“Los Jueces han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución*
14 *Nacional, sistema normativo que tiene fuerza obligatoria y vinculante (Bidart*
15 *Campos, Germán: El derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Ediar,*
16 *Bs. As. 1995). Recordemos que la Corte Suprema ha resuelto reiteradamente que*
17 *todos los jueces tienen el derecho y a la vez el deber de aplicar la Constitución*
18 *Nacional -a la que debemos sumar los instrumentos internacionales con*
19 *jerarquía constitucional- y asegurar su primacía”. (Moncayo, Guillermo:*
20 *“Criterios para la aplicación de las normas internacionales que resguardan los*
21 *derechos humanos en el derecho argentino”, en: “La aplicación de los tratados*
22 *sobre derechos humanos por los tribunales locales”, CELS, Editores del Puerto*
23 *SRL, Bs. As. 1997, pág. 89 y ss.).*

24 *“Los magistrados y abogados, como operadores, tienen la*
25 *obligación de dar aplicación y eficacia a los derechos reconocidos en los*
26 *tratados sobre derechos humanos”. (Bidart Campos Germán: “El art. 75 inc. 22,*

1 *de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos*”, en: “La aplicación de
2 los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, CELS,
3 Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, pàg. 77 y ss.). Pues, el sistema
4 normativo constitucional es *-al decir de Cornaglia-* la expresión global del
5 deber ser conjunto de la sociedad, es decir un programa de programas.

6 *“Tal es la exigencia actual para los jueces, a quienes se exige*
7 *protagonismo, función directiva, creatividad, preocupación por el proceso justo,*
8 *garantismo de la defensa en juicio y sobre todo asegurar la efectiva vigencia de*
9 *las garantías jurisdiccionales que ya tienen un nuevo y globalizado techo de*
10 *seguridad, al valer operativamente en el orden local las pautas principios y*
11 *estándares que emanan de los instrumentos internacionales y su interpretación*
12 *-y aplicación- por los órganos pertinentes*”. (Morello, Augusto M.: “*Perfil del*
13 *Juez al final de la centuria*”, Rev. LL 09-06-98.).

14 Nada de eso ocurre en autos, donde en base a puro
15 dogmatismo y evidente falta de fundamentación se falla *citra petita*
16 desechando por el contrario la cuestión traída a estudio sin más análisis ni
17 razón, olvidando bibliotecas enteras y la aplicación de las normas de orden
18 público al caso *sub examine*.

19 *“Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, al*
20 *componer la litis, incurre en dogmatismo, al omitir hacerse cargo, adecuada y suficientemente,*
21 *de las razones invocadas por el letrado recurrente en contra del acto administrativo que le*
22 *impuso la sanción disciplinaria*” (CSJT. Giudice, Victor A. s/Recurso de Apelación,
23 sent. nº 227, 14/04/03).

24 *“La congruencia descansa en todos los principios que informan*
25 *el proceso y configura una doble garantía: por un lado, establece las reglas a las*
26 *que debe someterse el juez evitando su arbitrariedad y asegurando su*

1 *imparcialidad y, por el otro, supone seguridad para los litigantes desde que*
2 *éstos saben de que defenderse. Consecuentemente, la congruencia asegura la*
3 *garantía constitucional de la defensa en juicio". (cf. Palacio,"Derecho Procesal*
4 *Civil" Tº I, Bs. As. ed. Perrot. 1967).*

5 Constituye una exigencia que obliga a establecer una
6 correlación entre dos grandes elementos definidores de todo proceso: la
7 pretensión y la decisión. La necesidad de correspondencia entre ambos
8 extremos funciona como condición del proceso verdadero (cf. Guasp,
9 *"Derecho Procesal Civil"*, Madrid, Ed. del Instituto de Estudios Políticos, 1956,
10 Tº I, pág. 1524 b; cf. Morello, A. M., *"El principio de congruencia como límite a*
11 *la decisión del juez en la sentencia"*, J.A., Doctrina, 1972, pág. 247; Colerio, Juan
12 Pedro," El principio de congruencia. La omisión de considerar pruebas y el
13 tratamiento de cuestiones no sometidas a la alzada", L.L. 1993-C-375).

14 La congruencia significa entonces, la adecuación a los hechos
15 alegados y a la pretensión esgrimida, siempre sin alterar la causa del pedir, ni
16 la acción ejercitada, ni otorgar nada que no haya sido instado. En la segunda
17 instancia las reglas generales de la congruencia se proyectan en dos
18 direcciones: a) cuando vedan al tribunal de alzada pronunciarse sobre los
19 capítulos, puntos o cuestiones que no fueron oportunamente sometidos a
20 decisión en primera instancia; b) cuando exigen una correspondencia entre la
21 decisión y lo que es materia de recurso, es decir que el acto por el cual el
22 recurrente funda su recurso (memorial o expresión de agravios) determina las
23 cuestiones sometidas a decisión del tribunal.

24 Resulta evidente que en autos la Alzada del Fuero ha limitado
25 formalmente el análisis de los agravios que se le propone, y han sido
26 considerados insustanciales contra el análisis de la sentencia del Juez de

1 grado que hace suyo, pese a la entidad de los demás fallos citados de Alzada y
2 del Superior Tribunal de la Provincia.

3 Entendemos que la sentencia en crisis castiga así en forma
4 indebida a esta parte, al pretender impedirle el ejercicio de su derecho de
5 defensa en juicio, y que por medio de retruécanos argumentales se pretende
6 confirmar una sentencia contraria a derecho, lo que deber ser objeto de
7 necesario análisis en esta instancia casatoria.

8

9 **III.- De la arbitrariedad.**

10 Demostramos así los serios errores jurídicos en la falta de
11 aplicación de la ley conducente al caso concreto para acreditar la procedencia
12 del recurso casatorio interpuesto conforme al art. 750 del CPCC, e incluso la
13 manifiesta contradicción con numerosos precedentes anteriores de la Excma.
14 Corte Provincial y la Alzada Civil del Foro. En consecuencia, sostendremos la
15 existencia de arbitrariedad manifiesta y gravedad institucional en el análisis y
16 la resolución que da el fallo recurrido a la cuestión.

17 Es decir Sres. Vocales, siendo exacto el agravio sobre la
18 cuestión, el mismo se basta por sí solo para variar la solución dada al caso
19 (CSJT, fallos 343 del 12/05/1994; 347 del 17/06/1994.). A los fines de seguir con
20 un orden expositivo en relación a las causales de arbitrariedad que afectan la
21 sentencia recurrida, sin descuidar el grado de importancia de cada una de las
22 cuestiones planteadas, seguiremos la clásica y magistral obra de Genaro R.
23 Carrió (*Recurso Extraordinario por sentencia arbitraria*, ed. Abeledo-Perrot,
24 1967).

25 a) Sustentar el fallo en afirmaciones dogmáticas o dar un
26 fundamento solo aparente; falta de motivación.

1 La sentencia impugnada pretende sostener sus fundamentos
2 en afirmaciones carentes de todo sustento objetivo en orden a la lógica y a la
3 clara realidad lógica y jurídica que surge de las constancias de autos.

4 En el fallo en crisis, falsa y dogmáticamente, se dispone emitir
5 una resolución sin considerar en Alzada la adecuada revisión las constancias
6 de autos. Esta circunstancia, absolutamente relevante para la resolución del
7 caso de marras, también es incomprensiblemente ignorada por la sentencia
8 casada, sin hacer consideración alguna sobre la falta de aplicación de las
9 normas adjetivas provinciales imperativas en la especie en la sentencia de
10 grado, poniendo el foco en su análisis fáctico, y tentando completar sus
11 falencias.

12 El decisorio omite palmariamente el esperado deber de control
13 de la adecuación del trámite al debido proceso, como las circunstancias de
14 que, en caso de duda, ha de estarse a la interpretación más favorable al
15 ejercicio de los derechos constitucionales de las partes. En el caso concreto es
16 justamente al revés, se vulnera el debido proceso y el derecho de defensa de la
17 parte recurrente.

18 El objeto del presente es poner de relieve la evidente falta de
19 relación entre lo decidido y las patentes constancias de autos. En virtud de
20 ello todo el fallo aparece a posteriori impregnado de voluntarismo y de una
21 posición preasumida y justificada por argumentos aparentes y escindidos de
22 la realidad, lo cual evidencia su dogmatismo, su renuncia a la consideración
23 del evidente *factum* que se le presenta, y es contradictorio con el debido
24 derecho constitucional a obtener una declaración jurisdiccional fundada en
25 las circunstancias del proceso de los justiciables.

1 Este es el enredo que constituye la premisa del “silogismo”
2 sentencial, lo que se repite –con sus matices– en ambas instancias, y como
3 errada consideración no puede llevar sino a un más grande yerro al resolver la
4 cuestión que se le presenta. Si bien tiene formalmente estructura sentencial,
5 esconde un formalismo ritual manifiesto denegatorio de justicia en el caso
6 concreto que impide considerarla como tal.

7 La circunstancia de haberse llamado autos a resolver en fecha
8 3 de octubre de 2013 en ocho cuadernos de prueba, y encontrarme casi seis
9 años después (febrero de 2019) con otra notificación personal que llama autos
10 para alegar, cuando no ha mediado ninguna de las notificaciones personales
11 previstas en los incs. 4 y 6 del art. 153 del CPCC, y que además la sentencia
12 casada pretenda la convalidación de tales actos insubsanables por vía elíptica,
13 convalidando la más absoluta indefensión para mi parte, es causal suficiente
14 para casar el pronunciamiento recurrido ante el Supremo Tribunal de la
15 Provincia.

16 Por ello es evidente que debe revocarse la conclusión
17 sentencial por medio de este recurso extraordinario casatorio, destinado a
18 romper –*casser* en francés, del cual derivó la denominación ante los
19 Tribunales Reales del recurso de *cassation*– la ilógica construcción que no
20 puede alcanzar a ser considerada una sentencia motivada de Alzada, que
21 carga con los vicios de origen de la sentencia de grado.

22 También ambos fallos recurridos –atacándose en concreto el
23 de Alzada por medio del recurso extraordinario local, y elípticamente su
24 antecedente– contradice jurisprudencia en la que ha establecido doctrina
25 legal desde antaño nuestro cimero Tribunal que ya había sido citada al
26 efectuar nuestros planteos, por lo que demuestra la falta de debida

1 consideración y lectura de las posturas de las partes, en los que se interpuso
2 incidente de nulidad (como cuestión principal) y de revocatoria sólo en forma
3 subsidiaria, para el caso de que los proveídos no se consideraran nulos.

4 Por otro lado, lo cierto es que en los ocho (8) proveídos
5 dictados acertadamente en cada uno de los cuadernos de prueba
6 impugnados- tienen idéntico decreto: *“Concepción, 3 de octubre de 2013. Por
7 deducido incidente de nulidad. Córrase traslado a la contraria por el término de
8 cinco días. SUSPÉNDANSE los plazos en el presente cuaderno de pruebas hasta
9 tanto se resuelva la cuestión planteada. PERSONAL. Fdo. DRA. IVANA
10 JAQUELINE MOCKUS. Juez.”*

11 Los ocho decretos en los cuadernos del actor 1 a 5 (A1 hasta
12 A5), y demandado 1 a 3 (D1 a D3), y son los últimos actos válidos en autos en
13 los mismos, dispuestos con acertadísimo criterio por la Sra. Juez subrogante
14 referida dieron trámite conforme a los términos del planteo efectuados por
15 esta parte, y fueron notificados a las partes en forma personal en aquel
16 momento en los casilleros físicos del Poder Judicial, sin que las contrarias los
17 cuestionaran oportunamente tampoco.

18 Y no se entiende tampoco como la sentencia casada de
19 Cámara se alza contra la doctrina legal de la Corte Suprema Provincial: ***“La
20 cuestión debatida y traída a esta instancia consistente en la posibilidad
21 o no de interponer incidente de nulidad y revocatoria con apelación en
22 subsidio en forma conjunta o simultánea, en el caso y a la luz de los
23 precedentes locales invocados, trasciende el interés meramente
24 personal de las partes por integrar un sistema que se relaciona y
25 compromete con principios constitucionales que configuran
26 instituciones fundamentales de nuestra convivencia política, (CSJTuc.,***

1 *"Pacheco de Navarro, Fátima vs. Sanatorio Central y otro s/Daños y*
2 *perjuicios", del 30/8/94; "Manca, Juan A. vs. Televisora de Tucumán*
3 *s/Reintegro, etc.", sent. nº 5 del 18/02/93), importando, además, el*
4 *apartamiento de tales principios, una afectación a la estructura*
5 *esencial del proceso en detrimento de los justiciables (CSJTuc., "Luna,*
6 *Josefa del Valle vs. Héctor Luis Semrik s/Liquidación de sociedad,*
7 *07/7/98; "Amenta J.A. vs. Dip A.T. y o. s/Restricción o límite al dominio",*
8 *12/8/94). CSJT. "Complejo Agroindustrial San Juan s/Concurso Preventivo"*
9 *(Inc. de apelación promovido por Homisa S.A.)" Sent. nº 357 de fecha*
10 *26.05.2003.*

11 Deberá esta Suprema Corte establecer si tal arcaico cartabón
12 forense de que no sería "posible interponer conjuntamente la nulidad y la
13 revocatoria de una resolución judicial..." ha quedado totalmente superado, si
14 es que se interpone la nulidad en primer término (por la entidad del vicio) y
15 se fundan agravios condicionados para el caso de que la resolución atacada no
16 sea considera nula, y si el mismo se condice con las previsiones
17 convencionales del más amplio derecho de defensa en juicio previsto en los
18 arts. 8.1, 8.2 y cctes. de la Convención Americana de Derechos Humanos y
19 demás Convenciones concordantes incorporadas a nuestra Carta Magna, lo
20 cual propugnamos en la especie.

21 Por lo tanto y conforme a todo lo considerado, es notorio que
22 el fallo en crisis se escinde del derecho aplicable a la causa para resolver
23 escuetamente en base a puro dogmatismo y en contra de las preceptivas
24 sustantivas y adjetivas existentes al respecto, escudándose aparentemente en
25 las reglas de la sana crítica inaplicables al caso de marras. Entendemos que
26 esta debida falta de fundamentación torna inclusive nula a la resolución,

1 dictada sin consideración somera de los antecedentes del proceso, o incluso
2 como si se tratara de otro proceso.

3 Lo expuesto encuadra al acto judicial dentro del marco de la
4 arbitrariedad. Esta circunstancia habilita la instancia casatoria, tal como lo
5 tiene dicho nuestro Supremo Tribunal:

6 *“En cuanto al análisis de la admisibilidad del recurso, podría ser*
7 *apropiada materia de debate la cuestión propuesta, en tanto se discuta una*
8 *posible infracción formal de la sentencia atacada, a la luz del art. 33 del CPCC*
9 *en lo que atañe a la necesidad de la debida motivación de la misma, cuestión*
10 *que pone en juego el tema ya dilucidado en la jurisprudencia del Alto Tribunal*
11 *Nacional, según el cual, el “deber de motivar adecuadamente la sentencia no*
12 *tolera concesiones. CSJN-8-894, Yome c. SEVEL” (CSJT. Allende c. Artaza,*
13 *Sent. n° 191, 26-5-92).*

14 Por todo ello, podemos concluir respecto a este punto que la
15 sentencia recurrida volitivamente desconoce e interpreta de forma arbitraria
16 y antojadiza el derecho aplicable al proceso, y pretende ignorar también los
17 hechos debidamente probados, siendo de tal magnitud esta circunstancia que
18 amerita la descalificación de la sentencia como acto judicial válido,
19 violándose un principio elemental de nuestro derecho –y podríamos decir del
20 derecho universal– como lo es el de defensa en juicio. La sentencia de alzada
21 arbitrariamente se ha esforzado en omitir o soslayar voluntaria y
22 dogmáticamente –y no sin cierto empeño inexplicable– cualquier
23 consideración sobre esta grave cuestión.

24 La Cámara incurre en una equivocada aplicación de las
25 normas de derecho para sentenciar en autos. Obviamente nos damos cuenta
26 que la postura de la misma resulta errónea, equivocada y contradictoria por

1 violación en la aplicación de las normas elementales de derecho, creando un
2 acto jurisdiccional desprovisto de todo sustento legal y fáctico, incurriendo
3 incluso en una arbitrariedad manifiesta que descalifica a la sentencia como
4 acto jurisdiccional válido, lesionando de esa forma el interés social, como así
5 también el derecho de propiedad y defensa en juicio contemplado en la
6 Constitución Nacional.

7 Evidentemente el asunto meduloso de la cuestión es
8 determinar si la conclusión a la cual se arriba respecto a la aplicabilidad de la
9 ley procesal y adjetiva habilita esta instancia extraordinaria mediante la
10 alegación de una incorrecta y palmaria violación del debido proceso.
11 Consideramos que la entelequia del caso nos mueve a encontrar una solución
12 acorde con los antecedentes de la causa y con la justicia que debe brindarse
13 en todo proceso, ausente en los autos de marras y que los Sres. Vocales de la
14 Excma. Corte Suprema sabrán remedar por este recurso extraordinario local.

15 La pretensión de mi parte no solo se ajusta a los reiterados
16 fallos y doctrinas citadas sino que luce evidentemente equitativa,
17 desconociendo la arbitraria sentencia de Alzada recurrida el legítimo derecho
18 a defensa en juicio y debido proceso, por lo que este Alto Tribunal debe casar
19 la aparente sentencia que soslaya el evidente derecho de mi mandante a
20 obtener un pronunciamiento fundado.

21 Atento a la crítica certera y razonada de los aparentes
22 fundamentos del fallo en crisis podemos concluir que estamos en presencia
23 de una sentencia descalificable como acto jurisdiccional válido, en mérito a
24 que la misma carece de fundamentos jurídicos suficientes, incurriendo en
25 arbitrariedad manifiesta y la aplicación –antojadiza por cierto– de las normas

1 de derecho sustancial y de forma; desconociendo así, claros y evidentes
2 principios del ordenamiento jurídico.

3 Podemos mencionar, sin desmerecer la honorabilidad de la
4 Alzada cuyo fallo se recurre, que es manifiesta la falta de debido análisis,
5 fundamentación y autocontradicción de la sentencia casada, la equivocada
6 aplicación de normas adjetivas violando el principio de congruencia –en autos
7 es manifiesta esta circunstancia– la falta de aplicación del principio de buena
8 fe por parte del sentenciante, quien debe de resguardar la presencia del
9 mencionado principio, ya sea, como principio general del derecho o cláusula
10 general de los contratos (Kemelmajer de Carlucci, Aída *“La buena fe en la*
11 *ejecución de los contratos”*).

12 Por lo tanto, estamos en presencia de una sentencia que por su
13 manifiesta arbitrariedad –en el hipotético caso de no ser revocada– sería
14 susceptible de ser atacada por vía del Recurso Extraordinario Federal, atento,
15 a las disposiciones de la ley 48.

16 b - Violación de los derechos constitucionales de igualdad ante
17 la ley, defensa en juicio, debido proceso, derecho de propiedad, jerarquía de
18 las leyes, etc.

19 La resolución en conflicto viola sin duda el derecho
20 constitucional de propiedad (art. 14 y 17 CN) de igualdad en juicio (art. 16
21 CN), del debido proceso y el derecho de defensa en juicio y debido proceso
22 (art. 18 CN) y el derecho entre tantos otros.

23 El art. 24 de la Constitución Provincial establece *“Los*
24 *habitantes de la Provincia como habitantes de la Nación Argentina, y al*
25 *amparo de la Constitución Nacional, tienen todos los derechos que aquella*

1 establece, sin negación ni mengua de otros derechos no enumerados o
2 virtualmente retenidos por el pueblo.

3 El Estado Provincial deberá promover medidas de acción
4 positiva y remover los obstáculos para garantizar la igualdad real de
5 oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
6 por esta Constitución, la Constitución Nacional, y por los Tratados
7 Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de
8 los niños, los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad y las
9 mujeres.

10 Los derechos y garantías consagrados por los Pactos y Tratados
11 Internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados como Ley de la
12 Nación, son de carácter operativo, salvo en los supuestos en que expresamente
13 se ha dejado sujeta su aplicación al dictado de una ley. Toda ley, decreto u
14 orden que, so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio de las libertades
15 y derechos reconocidos, o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas,
16 serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces. La
17 declaración de inconstitucionalidad pronunciada por los jueces tendrá efectos
18 específicos para la causa en que entendieren.”.

19 Respecto a la transgresión de la garantía de debido proceso y
20 defensa en juicio de las personas y sus derechos y de igualdad ante la ley, nos
21 remitimos –en virtud del principio de economía procesal– a lo ya expresado
22 en torno a las fallas del pronunciamiento en crisis, en el cual se pretende
23 convalidar actuaciones cumplidas en ausencia –o más bien encubiertamente–
24 de una de las partes de autos.

25

26 **IV - Reserva del caso federal.**

1 Teniendo en consideración las circunstancias del caso
2 relatadas en esta presentación, observamos que de arribarse a una sentencia
3 que deniegue la vía interpuesta por esta parte se afectaría gravemente el
4 derecho constitucional de defensa en juicio de mi parte, como la igualdad
5 ante la ley y debido proceso ante la indefensión sufrida, razón por la cual
6 conforme las consideraciones ya efectuadas nos reservamos la vía
7 extraordinaria del caso federal -art. 14, ley 48- para que ante la Corte Suprema
8 Federal se resuelva la cuestión litigiosa acorde a los derechos y garantías
9 constitucionales que fueran conculcados y de los cuales hacemos expresa
10 reserva de remedio federal.-

11

12 **V.- Doctrina legal propuesta.**

13 Proponemos como doctrina legal a efectos de casar la
14 sentencia impugnada las siguientes:

15 *“Es admisible el recurso de casación que se funda en la violación de*
16 *normas adjetivas fundamentales, como lo es pretender la producción de prueba*
17 *fenecido el término legal del mismo”.*

18 *“Reviste gravedad institucional y debe unificarse la jurisprudencia*
19 *que relativiza la violación de las normas adjetivas que regulan el período de prueba,*
20 *soslayando los principios procesales de perentoriedad y preclusión de los actos”.*

21 *“Es admisible el recurso de casación que se funda en la violación de*
22 *normas adjetivas fundamentales, como lo es pretender la producción de prueba en*
23 *indefensión de una de las partes del proceso”.*

24 *“Es admisible el recurso de casación que se funda en la violación de*
25 *normas adjetivas fundamentales, como lo es pretender la reanudación de términos*

1 *procesales suspendidos en forma expresa, sin la correspondiente notificación*
2 *personal prevista en el art. 153 del CPCC”.*

3 *“Es admisible el recurso de casación que pretende la revisión de un*
4 *pronunciamiento que se basa en la mera voluntad del sentenciante, intentando*
5 *omitir circunstancias fundamentales de la causa, que el caso concreto darían una*
6 *solución distinta al caso”.*

7 *"Es descalificable como acto jurisdiccional la sentencia que,*
8 *derogando en la especie normas adjetivas de orden público, da una solución aparente*
9 *a la cuestión sin hacerse cargo de su debido tratamiento”.*

10 *"Es descalificable como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento*
11 *que renuncia a la consideración integral de las constancias del proceso y da una*
12 *solución desentendida a la cuestión sometida a jurisdicción, lo que afecta gravemente*
13 *los derechos constitucionales de propiedad y de defensa en juicio”.*

14 *“Nuestro más alto Tribunal de la Nación consideró que la aplicación*
15 *irrazonable de la ley en relación con la garantía de defensa en juicio configura un*
16 *supuesto que excede el interés de las partes para proyectarse sobre la buena marcha*
17 *de las instituciones y por lo tanto constituye un supuesto de gravedad institucional*
18 *(cfr. Fallos 300-I; 418 y ss y CSJT, sentencia 244 del 12/05/94).*

19 *“Es dogmática la sentencia que omite la consideración de cuestiones*
20 *relevantes e insoslayables expuestas por las partes previamente a su dictado.”*

21

22 VI.- Derecho.

23 - Constitución de la Nación Argentina (preámbulo y arts.
24 14, 16, 17, 18, 31, y ccs.) y arts. 8.1 y 8.2 de la Convención Americana de
25 Derechos Humanos.

